

Índice AI: PRE01/091/2011  
28 February 2011

## **India Un proyecto siderúrgico en Orissa pone en peligro los derechos humanos**

Según ha advertido hoy Amnistía Internacional, unos 2.000 campesinos indios podrían perder sus medios de vida el próximo mes si sale adelante la propuesta de una operación siderúrgica por valor de 12.000 millones de dólares estadounidenses, en la que participaría el gigante surcoreano de la siderurgia POSCO.

Las autoridades indias han autorizado con condiciones a POSCO para establecer una planta siderúrgica y operaciones portuarias en unas 4.000 hectáreas de terreno del distrito costero de Jagatsinghpur, en el estado oriental de Orissa.

Esta superficie abarca terrenos de los que dependen los campesinos de la zona para su supervivencia y sobre los cuales podrían tener derechos con arreglo a la legislación india.

No se ha dado respuesta adecuada a las reclamaciones de los campesinos sobre las tierras a pesar de que las investigaciones oficiales han suscitado gran preocupación por la falta de protección del derecho a las tierras por parte del estado de Orissa en el contexto del proyecto de siderurgia.

La policía del estado podría ocupar los terrenos en marzo si las autoridades no reconocen el derecho de los campesinos a su uso.

“Eso podría tener consecuencias demoledoras para las comunidades locales –afirmó Ramesh Gopalakrishnan, investigador de Amnistía Internacional sobre India–. Unas 2.000 personas podrían dejar de tener acceso a las tierras comunales y verse abocadas a la miseria si las autoridades no actúan.”

La operación propuesta por POSCO sería el proyecto más importante de inversión extranjera directa acometido en India.

Dos comisiones de expertos establecidas por el Ministerio de Bosques y Medioambiente llevaron a cabo sendas investigaciones en julio y septiembre de 2010.

Concluyeron que las autoridades del estado de Orissa no habían dado respuesta a las reivindicaciones de la comunidad en relación con las tierras forestales comunes.

También determinaron que el proyecto de siderurgia propuesto vulneraba la legislación nacional sobre medioambiente así como el reglamento de costas, y no evaluaba debidamente los posibles efectos perjudiciales del megaproyecto para los medios de vida de las comunidades locales.

Pese a estas conclusiones, parece ser que el Ministerio está dispuesto a autorizar la puesta en marcha del proyecto siempre que las autoridades estatales de Orissa confirmen que ninguna comunidad local tiene derechos sobre la tierra en virtud de la Ley de Derechos Forestales de 2008. Pero eso no garantiza que se vaya a dar solución a las reclamaciones de las comunidades afectadas a través de un proceso transparente

y justo.

“India tiene el deber de proteger a las comunidades locales de los abusos contra los derechos humanos, incluidos los que comportan las operaciones empresariales” afirmó Ramesh Gopalakrishnan.

“Las autoridades y POSCO deben llevar a cabo una evaluación completa del impacto del proyecto en los derechos humanos y en el medio ambiente, en consulta con los habitantes de Jagatsinghpur, y asegurarse de que los trabajos sobre el proyecto no empiezan hasta que estén protegidos los derechos de la población.”

### **Información complementaria**

Desde junio de 2005, las comunidades locales del distrito de Jagatsinghpur protestan por su posible desplazamiento y los peligros para sus medios de subsistencia que entraña el proyecto de POSCO.

Los manifestantes han levantado barricadas en la zona y han impedido la entrada de las autoridades en tres pueblos. En junio de 2008, el manifestante Dula Mandal resultó muerto por una bomba durante un enfrentamiento entre partidarios y detractores del proyecto, y, en mayo de 2010, al menos 20 manifestantes sufrieron heridas de bala cuando la policía hizo uso excesivo de la fuerza contra ellos. Las protestas se han intensificado a lo largo de febrero de este año.

Varias comunidades indígenas adivasis y otras comunidades marginadas en estados ricos en minerales, como Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh y Bengala Occidental, llevan tiempo protestando por el posible impacto negativo de importantes proyectos de desarrollo en las tierras forestales y los hábitats tradicionales de los que dependen para su sustento.

Este informe se enmarca en la campaña Exige Dignidad, que persigue el fin de las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza y la agravan. La campaña moviliza a personas de todo el mundo para exigir a gobiernos, corporaciones y otras entidades influyentes que escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos.

Si desean más información, visiten <http://demanddignity.amnesty.org/es>.